



VICENÇ NAVARRO

La desequilibrada cobertura mediática de Venezuela y Honduras

Este artículo critica la falta de equilibrio en la información sobre Venezuela y Honduras dada por los mayores medios de España, mostrando ejemplos de esta información sesgada.

La supuesta falta de libertad de expresión en Venezuela

Hace unas semanas, la Fiscal del Ministerio Público de Venezuela propuso una ley a la Asamblea Venezolana que hubiera permitido sancionar, con penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, a aquellas personas que divulgaran información que atentara contra "*las instituciones del Estado*", "*la salud mental o moral pública*", "*el orden público*" o "*la seguridad de la población*", términos definidos vagamente y que podían dar pie a una represión en contra de la libertad de expresión. Como era de esperar, tal propuesta de Ley generó un gran rechazo por parte de la mayoría de los medios de información en España, los cuales han presentado tal propuesta de Ley como una prueba más de las tendencias dictatoriales del Presidente Chávez, al cual se le atribuye el deseo de destruir la libertad de prensa existente en aquel país.

Quisiera iniciar estas notas declarando que creo que esa Ley, tal como estaba escrita, era una mala ley y me alegró leer que la Asamblea Nacional, máximo órgano legislativo de aquel país, la había rechazado. Que quede claro, por lo tanto, mi rechazo hacia tal propuesta de ley. Ahora bien, habiendo dicho esto, quisiera denunciar la manera en que los cinco medios escritos de información de mayor difusión en España cubrieron y dieron a conocer esta noticia. Tales medios han presentado erróneamente y maliciosamente a Venezuela como un país con una muy limitada democracia, consecuencia de las políticas del gobierno Chávez encaminadas a establecer una dictadura. Esta lectura de Venezuela, que ha alcanzado la categoría de dogma en los medios de mayor tiraje en España, es errónea, lo que es fácilmente demostrable.

Si usted visita Venezuela verá que la mayoría de medios están, en realidad, controlados por la derecha, una derecha, por cierto, que no tiene nada que envidiar, en su nivel de estridencia, a la ultraderecha española o

estadounidense. Imagínese que la mayoría de medios en España fueran como la COPE o medios afines. O si el lector conoce EEUU, imagínese que la mayoría de medios estadounidenses fueran semejantes a la *FOX* o al *Washington Times*. La agresividad de tales medios hacia el gobierno Chávez y hacia la persona del presidente alcanza unos niveles de hostilidad altamente amenazantes.

En uno de los programas de mayor difusión de *Globovisión* (una de las televisiones de mayor audiencia en Venezuela) se pidió el linchamiento (sí, leyó usted bien, el linchamiento físico) del presidente Chávez. Supongo que a muchos voceros de la ultraderecha española les gustaría que le ocurriera algo semejante al Presidente Zapatero, pero el problema para ellos es que la legislación española no les permite que lo digan en público en sus medios. Pues bien, la legislación venezolana sí que lo permite. No es de extrañar que ante tal agresión, varios seguidores de Chávez, invadieran *Globovisión* y amenazaran a las personas en la sede de tal programa.

Como era de esperar, los medios españoles denunciaron tal ataque a *Globovisión*, y me parece bien que lo hicieran, pues tal acto es censurable (tal como lo censuró también, por cierto, el Gobierno Chávez). Pero me parece muy mal que ninguno de los medios de información españoles (repito, ninguno) informara que lo que causó tal ataque fue la petición de linchamiento del presidente Chávez. (Un ejemplo de este reportaje sesgado es el reportaje publicado en *El País*, de Juan Jesús Aznárez y Maye Primera sobre la Venezuela de Chávez titulado "*Llegó Chávez y mando callar*", 09.08.08).

Toda sociedad tiene el derecho de establecer unas normas que regulen el comportamiento mediático. Tal como ha señalado Marc Weisbrot, del Center for Economic and Policy Research de Washington EE.UU., en un artículo en el *Guardian*, 18.02.90, el Federal Communication Commission de EE.UU., que regula tal comportamiento mediático en EE.UU. no permitiría muchas de las estridencias, amenazas y nivel de hostilidad personal, que aparecen en los medios de ultraderecha venezolanos. Como ha indicado el informe de la *Human Rights Watch* de New York (que ha sido muy crítico con las políticas del Gobierno Chávez), los directivos de la compañía televisiva RCTV venezolana (que no vieron renovada su licencia, aunque continúa teniendo la mayor licencia de televisión por cable, y cuya no renovación se presentó como un indicador de las tendencias dictatoriales del gobierno Chávez) hubieran terminado en la cárcel en EE.UU.

Ni que decir tiene que cualquier persona demócrata debiera ser sensible a la necesidad de mantener la libertad de expresión de cualquier país, presionando para mantener una diversidad ideológica en los medios (muy limitada, por cierto, en España). Pero esta sensibilidad democrática pierde credibilidad cuando sus defensores muestran un sesgo tan desequilibrado como ocurre con la cobertura mediática de la realidad venezolana en los cinco mayores rotativos del país.

La Iglesia en Honduras

La Vanguardia publicó recientemente una entrevista con el Cardenal Rodríguez de Honduras en la que este Príncipe de la Iglesia indicó que el

golpe militar que había expulsado al presidente Zelaya de su país no era un golpe sino una maniobra plenamente constitucional (13.07.09). Tal Cardenal, apareció también en la televisión hondureña inmediatamente después del golpe, pidiéndole al presidente Zelaya que no volviera a su país. Tales declaraciones fueron reproducidas larga y extensamente, contribuyendo en gran manera a legitimar aquel golpe.

Ninguno de los mayores medios de información en España (repito, ninguno) ha publicado, sin embargo, las declaraciones del Arzobispo Luis Alfonso Santos Villena de Santa Rosa, cuya sede está también en Honduras, que en entrevistas publicadas en la revista Catholic News Service (04.08.09) y en sus respuestas a las preguntas hechas por la cadena de televisión CNN, indicó que *"algunos dicen que Manuel Zelaya amenazó a la democracia al proponer cambiar la Constitución. Pero los pobres de Honduras saben que Zelaya subió el salario mínimo. Esto es lo que conocen. De lo que ellos son conscientes es que defendió a los pobres, ayudando financieramente a los ayuntamientos y a las comunidades pequeñas con escasos recursos. Esta es la razón que ahora está en la calle, bloqueando carreteras y pidiendo la vuelta de Zelaya"*. Es más, en una entrevista telefónica el 30 de julio, señaló que era *"un error asumir (como hacen los medios) que Honduras tuviera una democracia y que la Asamblea Nacional representara a la mayoría de la población hondureña...En realidad, nunca hubo democracia en Honduras. Lo que tenemos es un sistema electoral donde a la población se le ofrece la oportunidad de escoger entre candidatos que han sido elegidos por la élite política. La población no está representada ni por la Asamblea ni por la Corte Suprema, todas escogidas por los ricos del país. Somos el país más corrupto de Centroamérica. No podemos decir que tengamos una democracia en la que la población participe en las decisiones"*.

El Obispo añadió que *"las personas detrás del golpe no eran demócratas. Ellos conspiraron antes para preparar el golpe y luego encontraron los argumentos para justificarlo. A ellos no les importa que niños mueran de hambre o que personas mueran en los hospitales por falta de medicinas"* (entrevistas, el 29 de julio en la Radio jesuita Progreso). Preguntado sobre las declaraciones del Cardenal Rodríguez en defensa del golpe, el Obispo indicó que *"la Iglesia hondureña tiene voces distintas a las del Cardenal"*. En realidad, las órdenes jesuitas y dominicanas de Centroamérica han condenado el golpe. Usted, lector, sin embargo, es probable que no lo sepa, pues no se ha informado al pueblo español de ello. ¿No le preocupa que los medios españoles de mayor difusión no sean más equilibrados en sus reportajes sobre América Latina?

Vicenç Navarro es catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Policy Analysis and Public Policy. The Johns Hopkins University